

Burocracia, corrupción e inequidad en los servicios públicos en el Perú

La policía y el Poder Judicial muestran tasas altas de pago de coimas y pocos usuarios terminan sus trámites.



GUSTAVO YAMADA*

RICARDO MONTERO**

El Perú vive una bonanza económica, con tasas de crecimiento promedio anual superiores al 6% por más de una década. En este contexto, los problemas que más le preocupan a la ciudadanía son la persistente desigualdad y pobreza, la corrupción en el Estado y la inseguridad ciudadana. Este estudio, que ha contado con el auspicio del CIES, exploró la relación entre los dos primeros temas, empleando el uso de servicios públicos como eje del análisis.

Cada ciudadano que debe realizar algún trámite en una dependencia pública termina usualmente mortificado por las largas colas y tiempos de espera que hay que soportar, por las veces que hay que regresar a la misma institución para terminar con el trámite, por el trato descortés de los funcionarios y, en muchos casos, por el requerimiento de coimas para 'agilizar' o hacer efectivo el servicio. Instituciones como la policía y el Poder Judicial muestran, simultáneamente, tasas preocupantemente altas de pago de coimas y una baja proporción de usuarios que terminan exitosamente sus trámites.

La investigación revela entre dos y tres tipos de castigos que enfrentan los pobres en el Perú. En primer lugar, tienen menor probabilidad de acceso a los servicios públicos, como la policía, el Poder Judicial y ser-

vicios de infraestructura. Un aumento en 100% en el gasto per cápita incrementa en casi 3% la probabilidad de acceder a alguno de los servicios públicos. En segundo término, los pobres tienden a gastar una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas exigidas por los funcionarios en servicios importantes para ellos como seguridad y salud, además de aquellos provistos por los gobiernos regionales y los ministerios. A nivel global, por cada 100% de incremento en el gasto familiar, la proporción destinada al pago de coimas se reduce en 0,3% (en promedio se destina 5,11% de ingresos a coimas). Asimismo, el estudio evidencia que los pobres tienen menor probabilidad de culminar exitosamente sus trámites en la policía y los servicios básicos. En términos agregados, sin embargo, este efecto no es tan claro.

El análisis de la relación entre la burocracia y la corrupción muestra que mayores niveles burocráticos incrementan los pagos realizados por conceptos de coima. También se encuentra que, en la mayoría de casos, las instituciones con mayores niveles de corrupción presentan las tasas de éxito más bajas. Sin embargo, en algunas dependencias, como la policía y los centros de estudios estatales, la coima parece tener un efecto acelerador del trámite (efecto "aceite").

A pesar de la retórica a favor de los pobres de todos los gobiernos, en la práctica la provisión de servicios estatales sigue siendo inequitativa. Se debe exigir una mayor progresividad en la provisión de los servicios



OPERACIÓN. La coima aceleraría los trámites. Los pobres son los más perjudicados.

INJUSTO
Se puede necesitar hasta 10 trámites para culminar una gestión en el sector público.

públicos para que el Estado cumpla su rol de igualador de oportunidades.

Por otro lado, la corrupción sería un fenómeno generalizado en muchas instancias públicas y privadas que, aparentemente, afectaría a todos los peruanos por igual. Sin embargo, este es-

tudio demuestra que, además, existe una inequidad muy grande en el campo de las coimas, que representa un sistema antiético de redistribución de ingresos, pues son los pobres los que aportan proporcionalmente más de sus ingresos para este fin. Los medios de comunicación, las organizaciones de vigilancia ciudadana y las redes sociales son ahora más activas para identificar y hacer público los casos de corrupción y para presionar por una mayor transparen-

cia en el sector público.

Por último, la ineficiencia de la tramitología en el Perú sigue reinante, a pesar de los esfuerzos de simplificación administrativa de los últimos años. Los datos de la investigación muestran que se pueden necesitar hasta 10 trámites para culminar una gestión en el sector público. Existiría resistencia de parte de los funcionarios que tienen en esta tramitología la fuente de sus rentas indebidamente. Este estudio hace evidente que la simplifi-

cación administrativa no solo es buena para reducir los costos de transacción y aumentar la competitividad de la economía peruana, sino también para disminuir la carga inequitativa que pesa sobre las familias pobres del Perú. Eliminar las fuentes de corrupción a lo largo y ancho del Estado sería una política social progresiva.

Las simplificaciones realizadas en las aduanas y en los trámites para la obtención del DNI y los pasaportes son ejemplos de buenas prácticas que deben extenderse a sectores como la policía, el Poder Judicial, Educación y otras instituciones. También se debe promover sanciones más severas a funcionarios que cometen actos de corrupción, tales como penas de prisión efectiva e inhabilitación permanente de la función pública. Se deben fortalecer las instancias de control de la gestión pública, como la contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, entidades que deberían coordinar más estrechamente sus acciones y establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

La diversidad de evidencias encontradas en esta investigación indicaría la necesidad de diagnosticar más detalladamente las fuentes de corrupción en cada institución y diseñar estrategias pertinentes para eliminarlas según cada caso.

* Profesor e investigador del CIUP. PhD en Economía de Columbia University.

** Profesor e investigador del CIUP. Máster en Economía de la Universidad del Pacífico. Estudio financiado: IDRC-Canadá